
A Debate en EU, la Realidad Mexicana

Los Inconvenientes del TLC

- ★ Sin Sentido, Sostener que Sólo es Asunto Comercial
- ★ Corrupción y Falta de Elecciones Honestas, Temas
- ★ La Incertidumbre Democrática Viene del Norte

LORENZO MEYER

Y resulta que las razones de los aliados políticos del Presidente Salinas en Estados Unidos, se parecen cada vez más a las que esgrimen sus enemigos, al punto que ya se confunden.

En la ceremonia de firma de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio (TLC), negociado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el ex presidente Carter declaró: "México tiene una larga ruta por delante para llegar a elecciones verdaderamente honestas y democráticas". Es claro que el ex presidente tiene una

Los Inconvenientes del TLC

Sigue de la primera plana

opinión muy negativa, y con sobrada razón, de las elecciones mexicanas, incluidas las del salinismo. Pero el duro juicio del ex presidente no paró ahí: si no hay apoyo en Estados Unidos para el TLC, añadió, entonces habrá llegado "el fin de cualquier esperanza para que en el futuro cercano tengamos comicios honestos y democráticos en México" (EXCELSIOR, 15 de septiembre).

"Que el México de hoy está repleto de corrupción es absolutamente cierto. Entonces estaremos tomando un gran riesgo al no adoptar el TLC y ayudar a reformar ese sistema" (La Jornada, 9 de septiembre). Esta declaración fue hecha por el diputado republicano norteamericano James Leach, que como el ex presidente Carter, también apoya al TLC.

Si las razones del ex presidente Carter y del diputado Leach resultan típicas del tipo de argumentos que los aliados del gobierno de Carlos Salinas van a esgrimir en el Capitolio de Washington en favor del TLC, va a resultar muy difícil diferenciarlas de las de sus enemigos.

Las declaraciones citadas constituyen un indicador de algo realmente inquietante: el alto grado en que los asuntos internos mexicanos son o pueden ser, parte del debate político estadounidense. El TLC no sólo está abriendo la economía mexicana a Estados Unidos, sino muchas cosas más. A estas alturas ya no tiene sentido sostener, como lo han hecho las autoridades, que la liberación del comercio entre México y Estados Unidos es sólo un asunto económico. No, por motivos geopolíticos y por la notable fuerza que genera la asimetría entre las partes contratantes, el TLC es algo que para México va a ir más allá de lo meramente comercial y financiero, y lo va a acercar a una verdadera integración con su poderoso vecino del norte. Justamente por eso, ciertas características negativas nuestras, como son la corrupción o la ausencia de elecciones honestas a las que hicieron alusión los señores Carter y Leach, van a ser discutidas públicamente en Estados Unidos con la frecuencia y en el tono que lo requieran las circunstancias políticas estadounidenses. El que eso nos guste o no, poco importa, pues es parte de la "interdependencia" con el vecino del norte.

La realidad mexicana, como bien lo subrayó el ex presidente Carter, contrasta muy negativamente con la teoría y la práctica democráticas. Quienes crea-

ron y quienes han administrado el actual sistema político mexicano, han tenido como uno de sus objetivos fundamentales, impedir el surgimiento de la incertidumbre democrática, evitando la alternancia de partidos en el ejercicio del poder. Su éxito en este empeño ha sido impresionante, sin paralelo a nivel mundial en este siglo: desde las elecciones de Carranza en 1917, los resultados oficiales del proceso electoral mexicano (con frecuencia, distintos de los reales) han sido tan predecibles como el cambio de las estaciones. Pero ahora resulta que la incertidumbre política se está colando desde fuera al, hasta ahora, sistema de la certidumbre perfecta (otra forma de llamar a la "dictadura perfecta").

Inevitablemente, la vida democrática implica un cierto grado de incertidumbre política, pues en ese tipo de sistemas siempre existe la posibilidad de que el partido en el poder tenga que dejarlo por una derrota electoral. Se trata de una incertidumbre problemática pero saludable, pues la sociedad la usa para limitar los abusos e incompetencias de la autoridad.

Al iniciar la negociación del TLC con el gobierno republicano de Estados Unidos en 1990, el salinismo buscaba superar la crisis económica que estalló en 1982 y la política de 1988, mediante una agresiva política neoliberal complementada o asegurada mediante una "relación especial" con Estados Unidos. Con esta decisión, y sin proponérselo, los líderes mexicanos unieron su proyecto y destino político a las incertidumbres democráticas estadounidenses. ¡Lo que pensaban evitar adentro les llegó de fuera!

Con el TLC y la creciente integración mexicana a la complejidad de la sociedad vecina del norte —integración quizá inevitable, aunque no necesariamente en los términos en que se está dando—, un conjunto de variables políticas de nuestro sistema han pasado a ser cada vez más influidas por el "factor norteamericano". Y los múltiples y contradictorios actores que hoy dan contenido a ese factor —el Presidente, los senadores y diputados, Ross Perot, los gobernadores de Texas y California, los líderes sindicalistas, las organizaciones ecologistas, los medios de comunicación, etcétera— están usando a lo que podemos llamar el "factor mexicano", para sus propios fines internos. De esa manera, hoy vivimos en México la incómoda paradoja de, sin tener aún un siste-

ma democrático, estar experimentando de trasmano uno de sus efectos: la incertidumbre respecto del destino del TLC por razones del voto.

El año pasado los votantes del país vecino negaron la reelección a su Presidente —George Bush— y, sin proponérselo, hicieron tambalear al TLC. El equipo de William Clinton que sucedió al de Bush en la Casa Blanca, decidió finalmente hacer suyo el acuerdo suscrito con México pero a condición de añadirle dos "acuerdos paralelos" sobre ecología y condiciones laborales. En virtud de tales acuerdos, México tuvo que aceptar la posibilidad —remota pero real— de sanciones comerciales si se llega a demostrar que en ciertas líneas de producción se violan sistemáticamente las disposiciones vigentes sobre ambiente y trabajo. Pero eso no fue todo; al llevar el TLC a un congreso tan dividido en materia de liberalización comercial como es hoy el de Washington, el gobierno mexicano está teniendo que ser testigo de cómo elementos de su agenda interna son arrastrados al debate —combate— político norteamericano. Como en el poema de García Lorca, hoy la élite mexicana puede decir que ella ya no es ella, ni su casa es ya su casa.

No es ésta la primera vez que en el Congreso de Estados Unidos se usan los asuntos mexicanos como armas en la lucha entre partidos y facciones. En 1913, cuando se intensificó la guerra civil en México, por ejemplo, los problemas de nuestro país y sus efectos sobre los intereses norteamericanos, se volvieron parte de los argumentos republicanos para atacar a los demócratas. El senador Albert B. Fall, un republicano ligado a empresarios con intereses en México, empleó muy bien las contradicciones de la política del Presidente Woodrow Wilson en México, para montar un foro en su contra en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El 6 de julio de 1919, Fall logró que el senado creara un comité para investigar los asuntos mexicanos (resolución 106, del 66 congreso), y las audiencias que tuvieron lugar entonces —cuando la presidencia de Wilson ya se había debilitado— dieron lugar a una catarata de acusaciones contra el gobierno de Carranza, contra Wilson y contra el Partido Demócrata. El "problema mexicano" fue entonces parte de los temas de la campaña presidencial de Estados Unidos y los demócratas la perdieron.

La acción de Fall llevó a

condicionar el reconocimiento de los gobiernos de Adolfo de la Huerta primero y de Alvaro Obregón después, a la firma de un "tratado de amistad y comercio". El propósito de ese tratado —que finalmente se transformó en los llamados "Acuerdos de Bucareli" de 1923— no era otro que reescribir las reglas de la relación económica de México con Estados Unidos, especialmente en el campo de la seguridad de las inversiones extranjeras, algo no enteramente ajeno a la letra y espíritu del actual TLC.

Como resultado de la experiencia, desde entonces y por varios decenios, los gobernantes mexicanos definieron el interés nacional de México —que en buena medida era el interés de ellos—, de manera tal que se minimizara la posibilidad de que los asuntos internos del país se volvieran a convertir en materia del debate interno norteamericano. Fue la búsqueda de una relativa independencia frente a Estados Unidos, lo que llevó a la élite mexicana a hacer del nacionalismo revolucionario y de la no interferencia de un gobierno en los asuntos de otro, su bandera en política exterior.

Con la propuesta del TLC en 1990 y con la búsqueda de la integración de México a Estados Unidos, se cierra un ciclo histórico. La preservación de la independencia relativa del pasado en un contexto de economía abierta y bloques comerciales, es hoy un precio demasiado alto a pagar para las élites mexicanas y, posiblemente, para el país en su conjunto. Al gastar millones de dólares en cabildeo dentro de Estados Unidos —entre 25 y 40 millones en tres años—, y apoyar la reelección de George Bush, el gobierno de Carlos Salinas volvió a meter de lleno el "factor mexicano" en la política interna del país del norte.

En estas circunstancias, la mejor defensa del nuevo interés mexicano es evitar las inconsistencias estructurales. Si las autoridades mexicanas se presentan ante sus socios externos como democráticas y sostenedoras de un Estado de derecho, pues conviene que la realidad corresponda a la teoría. Es mejor, mucho mejor, que el exterior no nos defina como una sociedad a la que se le tienen que imponer tratados paralelos por estar "repleta de corrupción". Y es mejor, mucho mejor, que la incertidumbre democrática que vivimos sea la de nuestra democracia y no la de una ajena. Sé que por el momento ésta es una solución improbable, pero no imposible.